



Columna

Cristian Rodríguez

Director Instituto de Políticas Públicas UCN



El futuro de los proyectos verdes

La suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo, desarrollado por Colbún en la región de Antofagasta, revela los desafíos estructurales y regulatorios que enfrenta Chile en su transición hacia una matriz energética más limpia y sustentable. Este proyecto, valorado en 1.400 millones de dólares y con una capacidad de 800 MW, prometía generar 1.800 GWh anuales, ofreciendo una solución tecnológica avanzada para el almacenamiento de energía renovable. Sin embargo, las observaciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), han frenado su desarrollo, poniendo de manifiesto la tensión existente entre la normativa ambiental y la necesidad de fomentar proyectos estratégicos para la sostenibilidad energética del país.

Desde la perspectiva de política pública, este caso resalta un problema central: cómo equilibrar el impulso hacia una transición energética ambiciosa con la rigurosidad de los marcos regulatorios diseñados para proteger el medio ambiente.

El proyecto Paposo se basaba en un sistema de bombeo reversible, utilizando agua desalinizada en un circuito cerrado, lo que lo convertía en la primera iniciativa de este tipo en Latinoamérica. Esta tecnología permite almacenar energía en momentos de baja demanda y liberarla en los picos de consumo, estabilizando la red y permitiendo una mayor inclusión de energías renovables en la matriz energética. Antofagasta, con sus óptimas condiciones solares y eólicas, es el escenario ideal para este tipo de pro-

yectos. Sin embargo, el freno impuesto ha generado incertidumbre para futuros inversionistas en el sector.

El principal problema institucional identificado en este caso es la demora y la complejidad del proceso de evaluación ambiental. Este problema, plantea una cuestión clave en términos de política pública: ¿están los marcos regulatorios preparados para facilitar la transición energética, o representan un obstáculo que podría frenar inversiones cruciales para el desarrollo del país y la región?

El debate no radica en relajar los estándares ambientales, que son fundamentales para el desarrollo sostenible, sino en modernizar la institucionalidad para que pueda responder con mayor eficiencia a la creciente demanda de proyectos en energías limpias. El SEA juega un rol central en garantizar que los proyectos energéticos se desarrollen de manera responsable, pero debe encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la necesidad de avanzar con celeridad en proyectos estratégicos.

En conclusión, Chile y la región de Antofagasta necesitan urgentemente un marco regulatorio más ágil y predecible. El país está en una carrera contra el tiempo para cumplir sus metas de descarbonización al 2050, y la incertidumbre regulatoria puede desincentivar la inversión. La institucionalidad debe evolucionar para acompañar el ritmo de los cambios tecnológicos y las demandas del mercado energético, sin sacrificar el rigor de las evaluaciones ambientales.